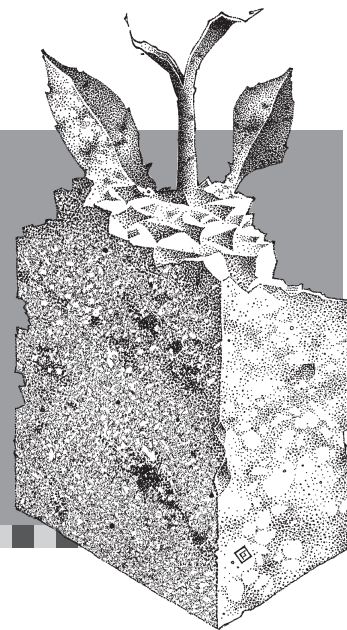


La contradicción mayor de la Ley INRA

Derecho propietario vs. capacidad productiva



La cuestión esencial sobre el problema de la tierra en Bolivia—desde la Reforma Agraria de 1953—no está en el derecho propietario, sino y, fundamentalmente, en hacer productivo el factor tierra, es decir tener capacidad de explotar los recursos forestales y desarrollar la agricultura.

Por Gustavo Rodríguez Cáceres

La Ley 1715 regula fundamentalmente el derecho propietario sobre la tierra y lleva adelante el proceso de saneamiento. Éste es un "procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agrario y se ejecuta de oficio o a pedido de parte". Reconoce las siguientes formas de propiedad:

- El solar campesino.
- La pequeña propiedad.
- Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
- Las propiedades comunarias.
- La mediana propiedad.
- La empresa agrícola.

También establece que las dimensiones del solar campesino y la pequeña propiedad podrán variar de acuerdo a la zona geográfica, que las dimensiones de las TCO y las propiedades comunarias serán las que correspondan a su uso tradicional y, finalmente, pone un límite al tamaño de la empresa agrícola: 2.500 hectáreas. Además que, por definición, las primeras cuatro formas de propiedad cumplen una Función Social (FS) y sólo pueden ser expropiadas con fines de utilidad pública, en cambio exige a la mediana propiedad y a la empresa agrícola cumplan una Función Económica Social (FES) para que no sean expropiadas.

Punto de inflexión

Hasta aquí la ley aparenta ser igualitaria y equitativa, pues reconoce a todos los sectores de la sociedad boliviana su derecho propietario sobre la tierra. Sin embargo, también establece que las primeras cuatro formas son indivisibles e inembargables; las TCO y las propiedades comunarias, además, son inalienables e imprescriptibles. Lo que en buen castellano —y en las actuales condiciones económicas— significa que sus propietarios no son sujetos de crédito y no pueden captar inversiones. Y más aún, se exige a los propietarios realizar una explotación "sostenible" de sus posesiones. Cabe subrayar que para hacer rentable una explotación agrícola o forestal, se necesitan recursos, mucho más si se exige que la misma sea sostenible. ¿De dónde sacarán estos recursos los campesinos, pequeños agricultores o naciones originarias, si no es del crédito o de la inversión directa estatal o privada?

La actual ley tiende a patentizar la situación de millones de campesinos pobres —aunque con tierra— que se ven obligados a dejar sus predios y convertirse en parias en las ciudades. En el oriente la situación

tampoco es halagadora, pues, la mayoría de las etnias que posee o poseerá una TCO, en el mejor de los casos, será convertida en guardabosque o en curiosidad turística a cambio de migajas.

La denominada Ley INRA también declara que no reconoce el latifundio, entendido éste como la gran propiedad improductiva, y exige a la mediana propiedad y a la empresa agrícola, el cumplimiento de la FES que, según esta norma legal, es desarrollar "actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo". Sin embargo, la realidad es terca y un artículo legal no la hará cambiar, pues no se trata de declarar que el latifundio es ilegal, sino de generar condiciones para que la gran propiedad sea productiva.

El gran desafío

¿Cómo hacer productiva la tierra? es la pregunta cardinal sobre el problema, no se trata sólo del derecho propietario, sino y, fundamentalmente, de ser capaces de explotar los recursos forestales y desarrollar la agricultura de Bolivia. Es cierto que entre los objetivos de la ley INRA no estaba responder a esta interrogante y tal vez sea pedirle mucho, pero, no cabe duda, que es su gran debilidad.

Una Reforma Agraria que no resuelva el problema de la improductividad de la tierra no merece llamarse tal; afrontar el asunto sólo desde la perspectiva del derecho propietario, es querer resolver el problema del hambre del campesino, bañándolo y arrojándolo, es decir cambiándole el aspecto y no dándole de comer.

Una de las consignas de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1715) expresa que es "una herramienta para la tierra", cuando, al parecer, es una herramienta para la pobreza ■